Datos del Expediente

Carátula: CONS PORTUARIO REGIONAL DE MAR DEL PLATA C/ MOLIENDAS DEL SUR S.A. S/ INCIDENTE DE REVISION

Fecha inicio: 30/05/2019

N° de

Receptoría: MP - 38780 - 2016

N° de

Expediente: 167996

Estado: Fuera del Organismo - En Juz.
Origen

REFERENCIAS

Sentencia - Folio: 1179

Sentencia - Nro. de Registro: 218

06/09/2019 - SENTENCIA DEFINITIVA

Texto del Proveído

----- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea) -----

REGISTRO N° 218-S FOLIO N° 1179/83

EXPEDIENTE N° 167.996. JUZGADO N° 10.

En la ciudad de Mar del Plata, a los 06 días del mes de septiembre de 2019, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "**CONS PORTUARIO REGIONAL DE MAR DEL PLATA C/ MOLIENDAS DEL SUR S.A. S/ INCIDENTE DE REVISION**", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes

CUESTIONES

1ra.) ¿Es justa la sentencia de fs. 209/213?

2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:

I.- En el pronunciamiento atacado el juez rechazó el incidente de revisión promovido por el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata e impuso las costas a su cargo.

Para arribar a dicha conclusión estimó que el incidentista no había logrado conmover la decisión dictada en los autos principales, al no producir ninguna prueba que acreditara debidamente la causa de la obligación, esto es, el origen de los conceptos facturados.

Advirtió que de la insinuación al pasivo concursal surgía que el crédito reclamado se fundaba en 123 facturas por diversos servicios supuestamente prestados por el consorcio portuario, así como por el derecho de explotación de la planta elaboradora de harina de pescado por períodos

concursoales, de conformidad con la Resolución nro. 142.11.1/05 (B.O. del 13-12-2005). Sin embargo, destacó que la aludida resolución se refería a cánones por uso portuario de embarcaciones pesqueras y buques inactivos y no por uso de suelo.

Refirió que el incidentista ofreció en su escrito de demanda, entre otras pruebas, la pericial contable para demostrar en general el alcance, la entidad y la legitimidad del derecho pretendido, y en particular si las facturas se encontraban contabilizadas en sus registros, si las causas expuestas y montos indicados se encontraban debidamente justificadas conforme el art. 32 de la ley 24.522; si correspondían a períodos o servicios relacionados con las resoluciones y permisos acordados y, finalmente, para que se determinara el monto actual del crédito cuyo reconocimiento se pretendía por esta vía.

Expuso que ante la negativa pormenorizada de los hechos y el desconocimiento de la autenticidad material e ideológica de la documental por parte de la incidentada, resultaba de fundamental importancia la prueba pericial contable ofrecida por el incidentista para acreditar la causa, monto y privilegio del crédito reclamado en autos, pese a lo cual fue declarada negligente en su producción a fs. 198.

Aseveró con respecto a la prueba informativa que sólo se había diligenciado respecto del expediente administrativo nro. 927, del que surgía que mediante la Resolución 183-24/078 se habría aceptado la transferencia del permiso de uso otorgado a la firma Pedro Moscuza e Hijos S.A. a favor de Moliendas del Sur S.A. del predio identificado catastralmente como 35 "G", lo que no coincidía con los términos de las posiciones obrantes en el pliego de fs. 178 en donde el letrado del incidentista se refería a la ocupación de la parcela 35 "F".

Agregó que tampoco coincidía el número de parcela con la consignada en las facturas cuyas copias obraban en el expediente principal (vinculadas con la parcela 35 "F" y no con la 35 "G").

Insistió en que fue el propio accionante quien en su escrito de demanda sostuvo que la insinuación se realizó *"sobre la base de facturas perfectamente confeccionadas, registradas y asentadas en la documentación contable de mi mandante que demuestran la causa de la obligación y que remitidas y recibidas por la empresa concursada en su domicilio social sito en calle Mitre Nro. 1955 Piso 4° de Mar del Plata"*, por lo que la prueba pericial contable resultaba fundamental a fin de acreditar el mentado asentamiento contable en los libros del consorcio, la recepción de las facturas por parte de la concursada, la justificación de su causa, los montos y correspondencia con los períodos y servicios relacionados en las resoluciones y permisos invocados en aquéllas, así como el monto actual del crédito cuyo reconocimiento se pretendía, pese a lo cual el accionante fue declarado negligente en la producción de dicha prueba.

Concluyó, finalmente, que ante la aludida contradicción contenida en la Resolución 183-24-07 consignada en las facturas por cobro de canon del lavadero y depósito de cajones, sumado a la ausencia de prueba informativa y pericial contable supletoria a su respecto, correspondía rechazarse la revisión incoada.

II.- Síntesis de los agravios.

El incidentista apeló por medio del escrito electrónico del día 3-4-2019 y presentó el memorial por la misma vía el 12-4-2019. La réplica de la contraria tuvo lugar a través de la pieza del 7-5-2019.

Afirmó que tres eran los agravios que el pronunciamiento le ocasionaba, dos de ellos relacionados con la pretensión y el tercero con la imposición de costas.

Sostuvo que el primero se centraba en la desnaturalización que se realizó de su pretensión verificatoria al ignorarse las normas sustanciales que hacían al derecho de crédito esgrimido, por tratarse de liquidaciones de deuda que gozaban de la presunción propia de los instrumentos públicos en los términos del art. 979 incs. 2do. y 5to. del Cód. Civ. (ley 340).

Continuó con el segundo, relativo a la aplicación del sistema verificadorio, manifestando que mediaba una contradicción con la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia, ya que tratándose de un sujeto de derecho público no estatal las facturas emitidas por el consorcio gozaban de la presunción de legitimidad, revistiendo el carácter de títulos ejecutivos.

Finalizó su exposición esgrimiendo que por tratarse de una cuestión compleja, resuelta incluso en instancias superiores, las costas debían establecerse en el orden causado.

III.- Consideración de los agravios.

III.1.- El art. 272 del código de rito sienta como principio general que el tribunal de alzada se encuentra impedido de «[...] *fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del Juez de Primera Instancia...*».

En este sentido las potestades conferidas al tribunal con motivo de la apelación deducida no importan un nuevo juicio, toda vez que el ordenamiento procesal le asigna una función revisora del material litigioso y de la decisión de la instancia anterior, sin perjuicio de los poderes que le asisten respecto a las cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia (esta Sala, causas nro. 139.643 RSD 25 del 28-2-2008; nro. 150.859, RSD 187 del 12-7-2012, entre otras).

Como he señalado en anteriores oportunidades (v. esta Sala, exptes. 134.970, S. 29—11-07 Reg. 1102-S; 135.256, S. 12-6-08 Reg. 274-S, entre otros), un proceder contrario a tal directiva transgrede abiertamente tanto las reglas del debido proceso como los principios de congruencia, de preclusión procesal y la garantía de la defensa en juicio de la contraparte (art. 18 C.N.), sometiendo a los justiciables a una constante inseguridad jurídica, sumado a que, paralelamente, excede el ámbito de conocimiento de este Tribunal según consagra la norma del art. 272 del C.P.C.C. (esta Sala, causa nro. 139.643 RSD 25 del 28-2-2008).

Destaca reconocida doctrina que la función del Tribunal *ad quem* no es la de fallar en primer grado, sino la de revisar el pronunciamiento dictado en primera instancia (Palacio, Der. Proc. Civil T. V pág. 460; Hitters, J.C. “*Técnica de los recursos ordinarios*”, T.I pág. 406).

Ha resuelto el Máximo Tribunal Provincial que «*Los límites de la jurisdicción abierta por el recurso están dados por los capítulos litigiosos propuestos al inferior y no por la*

sentencia apelada» (Ac. y Sent. 1957, v. VI, p. 262; 1961, v. III p.332; 1975 p. 11, entre otros), y que «Si bien el recurso contra el pronunciamiento abre la jurisdicción de Alzada a los efectos de resolver sobre la justicia de dicha sentencia, en manera alguna posibilita fallar sobre las peticiones formuladas en segunda instancia con prescindencia de las cuestiones planteadas ante el juez de primer grado, pues el tribunal “ad quem” carece de atribución para resolver sobre capítulo alguno que no hubiese sido propuesto a decisión del inferior» (DJBA v. 117 p. 142; v. 118, p. 9, entre otros).

Tal como lo vengo sosteniendo en casos análogos (esta Sala, causas nro. 130.596, RSD 235 del 19-8-2010, nro. 139.643 RSD 25 del 28-2-2008) hasta tanto el sistema judicial no atribuya a la Cámara de Apelaciones otra latitud de facultades, no puede trasponer ese límite que reviste el carácter de orden público, toda vez que la prescindencia de tal limitación vulnera el principio de congruencia y la *res judicata* que hace al debido proceso de raigambre constitucional (C.N., arts. 17 y 18; C.A.D.H. art. 8; arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 164 del CPC; C.S.J.N. Fallos 229:953 y más recientemente en Fallos 339:1308 del 13-9-2016).

III.2.- Para visualizar el panorama completo en que tuvo lugar la promoción de este incidente de revisión, resulta fundamental conocer el modo en que se expidió el juez en los autos principales ("Moliendas del Sur S.A. s/ Concurso preventivo -pequeño-") al momento de dictar la resolución verificatoria del art. 36 de la ley 24.522.

Pues bien, a través de la consulta de la mesa de entradas virtual, en la página de la S.C.J.B.A. en internet, encuentro que el 27-10-2016 el colega de la instancia anterior declaró completamente inadmisibile el legajo nro. 21 del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata.

Las razones dadas para decidir de ese modo fueron que *«El insinuante tan solo acompaña como respaldo de su pretensión, facturas emitidas por él unilateralmente, sin estar constancia de recepción ni conformidad por parte de la concursada. No acompaña contratos, actos administrativos, certificaciones contables ni permisos de uso alguno que acrediten la causa de la obligación. La concursada ha negado la totalidad de dichas facturas y, al no constar en las mismas que allí figuran ni haberse acreditado que se encontrare obligada a su pago, entiendo que no se hubo acreditado de manera alguna la causa de la obligación insinuada, correspondiendo declarar la inadmisibilidad del crédito»* (el subrayado no es de origen).

III.3.- A esta altura del relato, examinados los términos en que quedó trabada la litis en este incidente (v. demanda a fs. 45/52 y contestación a fs. 64/100) y los argumentos vertidos en los dos primeros agravios del memorial, encuentro que el apelante procura introducir nuevos argumentos sobre los que el demandado no tuvo posibilidad de defenderse adecuadamente ni el juzgador de emitir juicio alguno.

En este sentido advierto que dichas quejas se sustentan en derredor de una misma idea: que las facturas emitidas por el consorcio como sujeto de derecho público no estatal gozan de la presunción de legalidad que no se desbarata por la mera negativa del concursado, sin aportar prueba alguna de su ilegalidad, inexactitud o nulidad.

Ello entra en abierta contradicción con los fundamentos esbozados en la demanda al procurar cimentar su pretensión. Y es que en esa oportunidad expuso que la causa de la obligación de cada una de las facturas se desprendía de los registros y asientos obrantes en la documentación contable de la entidad, ofreciendo la prueba pericial pertinente para que el experto pudiera expedirse sobre la existencia, el registro, la justificación, el alcance y la legitimidad de las acreencias pretendidas, en caso de desconocimiento por parte del concursado (v. fs. 49/51).

Y en el devenir del trámite de estos autos ello es lo que acertadamente puso de resalto la jueza al dictar la sentencia en crisis, esto es, que ante la negativa pormenorizada de los hechos y el desconocimiento de la autenticidad material e ideológica de la documental por parte de la incidentada, resultaba de fundamental importancia la prueba pericial contable ofrecida por el propio incidentista en su demanda para acreditar la causa, monto y privilegio del crédito reclamado en autos. Lo que fue, incluso, reafirmado por éste al manifestar a fs. 123/124 que la pericial contable resultaba una prueba fundamental para acreditar la acreencia reclamada. Sin embargo, esa prueba fue declarada negligente en su producción a fs. 198, no mereciendo reparo alguno por el incidentista y que, a su vez, desencadenó la presentación del informe por parte de la sindicatura el día 11-2-2019 aconsejando declarar inadmisibile el crédito objeto de revisión.

Mal puede ahora el accionante desentenderse de las consecuencias procesales y sustanciales derivadas del incumplimiento de dicha carga probatoria, pretendiendo sortear tal valladar a través de una radical modificación en el memorial de los argumentos jurídicos en los que sustenta su pretensión.

En suma, las dos primeras críticas del apelante contra la sentencia dictada en la instancia anterior, invocando argumentos que no sólo no fueron propuestos al juzgador sino que transitan por carriles diametralmente opuestos a los oportunamente planteados, y respecto de los cuales el accionado -lógicamente- no pudo defenderse adecuadamente, no pueden ser objeto de análisis por parte de este Tribunal (art. 272 C.P.C.C.).

III.4.- El tercer -y último agravio- no corre mejor suerte que los anteriores.

El régimen de costas en un incidente de revisión se fundamenta en los principios comunes, es decir, el criterio objetivo de la derrota con las limitaciones procesales aplicables en la cuestión por la remisión que el art. 278 de la ley 24.522 efectúa a los códigos procesales locales (esta Sala, causas nro. 142.566, RSD 12 del 17-2-2009; nro. 138.236, RSD 88 del 8-4-2008, entre otras).

De allí que constituyendo la revisión una pretensión que se canaliza a través de una instancia judicial contenciosa que tramita por la vía incidental (art. 280 de la ley 24.522), la resolución que la decide determina la existencia de un vencedor y un vencido, por lo que las costas se impondrán objetivamente a quien resulte vencido, a menos que lo debatido pueda ser calificado como una cuestión dudosa de derecho (art. 69 del C.P.C.C.; esta Sala, causas nro. 154.994, RSI 101 del 28-3-2019, entre otras).

De tal manera, «*el arbitrio judicial para disponer la eximición de costas en materia de incidentes se encuentra limitado al supuesto de que la cuestión jurídica sobre la que el mismo versa se preste a dificultades en su solución, sea por su complejidad natural o por la divergente interpretación que le haya dispensado la doctrina o jurisprudencia (...)*» (Loutayf Ranea, Roberto; "Condena en costas en el proceso civil", Astrea, Buenos Aires, 1998, p. 276 y sstes.).

Y si bien la doctrina y la jurisprudencia interpretan que corresponde flexibilizar el principio general atendiendo a las circunstancias del caso y, entre otros parámetros, a quién fue el causante del desgaste jurisdiccional, si el acreedor se vio forzado a recurrir a la etapa eventual, o bien a la seriedad y al fundamento de la oposición del síndico a la pretensión verificatoria, lo cierto es que este análisis de excepción sólo tiene lugar en la medida que la pretensión incidental prospera, pues de lo contrario los gastos causídicos recaen en cabeza del incidentista vencido (art. 69 del C.P.C.C. y arts. 278 y ss. de la ley 24.522).

En el caso, el quejoso pretende modificar la manera en que fueron impuestas las costas limitándose a alegar que se trata de una cuestión "ardua" por las "dificultades" que la controversia genera.

En suma, habiéndose rechazado la pretensión incidental en la instancia de origen, sumado a la desestimación de los dos primeros agravios que terminan por confirmar aquella decisión, al no encontrar en la posición defendida por el quejoso razones, mérito o elementos fácticos o jurídicos que me persuadan a hacer valer la facultad excepcional con la que me inviste el art. 69 del ritual en materia de eximición de costas, concluyo que cabe desechar la impugnación y confirmar lo decidido (arts. 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.).

Por los fundamentos expuestos **VOTO POR LA AFIRMATIVA.**

El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:

Corresponde rechazar el recurso de apelación articulado por el incidentista el 3-4-2019, con costas (arts. 68, 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.; arts. 36, 37, 278, 280 y conc. de la ley 24.522).

Así lo voto.

El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

En consecuencia se dicta la siguiente

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: **I)** rechazar el recurso de apelación articulado por el incidentista el 3-4-2019 (arts. 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.; arts. 36, 37, 278, 280 y conc. de la ley 24.522). **II)** Imponer las costas al apelante vencido (arts. 68 y

69 del C.P.C.C. y art. 278 de la ley 24.522). **III)** Diferir la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). **REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE** personalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C.C.). **DEVUÉLVASE.**

RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU

Alexis A. Ferrairone

Secretario

----- Para copiar y pegar el texto seleccione hasta aquí (sin incluir esta línea) -----

[Volver al expediente](#) [Imprimir](#) ^